



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta de enero de dos mil veintitrés

**A22-123**

**ASUNTO:**

APELACIÓN AUTO – ordinario laboral

**DEMANDANTES:**

**MARIA VANESSA CASTAÑO RÍOS y ELKIN HUMBERTO OMAÑA RAMÍREZ**, ambos en nombre propio y representación de sus hijos **ELIN DAYANA y MARIANGEL OMAÑA CASTAÑO** respectivamente.

**DEMANDADOS:**

**YURI TATIANA GARCÍA QUINTERO  
MÓNICA MARCELA GARCÍA QUINTERO  
ÓLVER DAVID GARCÍA QUINTERO (fallecido)<sup>1</sup>  
GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO  
MODA A LA CARTA Y & J SAS**

**RADICADO:**

05001-31-05-013-2021-00416-01

**DECISIÓN:**

**CONFIRMA** auto que resuelve imposición de medida cautelar

Link:

[22-123 \(013-2021-00416\) auto](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la parte actora contra la decisión emitida el 20 de mayo de 2022 mediante la cual el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín resolvió lo atinente a la imposición de una medida cautelar.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 2** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

### 1. ANTECEDENTES

Pretende la parte actora que tras declararse la existencia de un contrato de trabajo a término fijo, o subsidiariamente a término indefinido, entre MARIA VANESSA CASTAÑO RÍOS y los demandados, y

---

<sup>1</sup> Hecho acaecido en el transcurso del proceso, concretamente el 25 de enero de 2022 conforme se aprecia en el Registro Civil de Defunción a folio 3 del archivo 17 de la carpeta de primera instancia.

que hubo una culpa suficientemente comprobada de los empleadores en el accidente de trabajo, se les condene solidariamente a pagar la indemnización plena de perjuicios en los montos que refieren, además del auxilio a la cesantía y sus correspondientes intereses, la sanción contemplada en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, prima de servicios, tiempo suplementario, vacaciones, indemnización por despido injusto, la sanción contemplada en el art. 65 del CST, pago de aportes a pensión y reajuste de las cotizaciones efectuadas deficitariamente.

Al contestar la demanda YURI TATIANA GARCÍA QUINTERO, MÓNICA MARCELA GARCÍA QUINTERO y ÓLVER DAVID GARCÍA QUINTERO negaron la calidad de empleadores, la que sí aceptó el señor GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO, indicándose que éste último era un único propietario del establecimiento de comercio Panadería y Repostería Restaurante Cafetería La Mejor.

Mediante auto del 13 de enero de 2022, ante el silencio de la sociedad MODA A LA CARTA Y & J SAS, se tuvo por no contestada la demanda.

Mediante memorial del 8 de abril de 2022, la parte actora solicitó la imposición de una medida cautelar, en los siguientes términos:

“(…) Para el momento de presentación de la demanda, los demandados Mónica Marcela García Quintero, Ólver David García Quintero y Gustavo Alfredo García Quintero, se encontraban inscritos como comerciantes en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ostentando la calidad de propietarios de los establecimientos de comercio PANADERIA REPOSTERIA RESTAURANTE CAFETERIA LA MEJOR, RESTAURANTE PARRILLA Y SABOR DE SUCRE y RESTAURANTE PANADERIA CAFETERIA EL PATIO, respectivamente.

El auto admisorio de la demanda les fue notificado a los referidos demandados el 11 de octubre de 2021, quienes, por conducto de apoderado, dieron respuesta a la demanda el 28 del mismo mes y año.

Mediante comunicación del 05 de noviembre de 2021, inscrita en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 08 de noviembre de 2021, en el libro 15, bajo los números 86374 y 86373, tanto la matrícula mercantil del comerciante (21- 479472-01), como la de su establecimiento de comercio (21- 645263-02) fueron canceladas, esto con relación al señor Ólver David García Quintero.

Mediante comunicación del 19 de noviembre de 2021, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 25 de noviembre de 2021, en el libro 15, bajo los números 90599 y 90597, tanto la matrícula mercantil de la comerciante (21-462747-01), como la de su establecimiento de comercio (21- 483823-02) fueron canceladas, esto con relación a la señora Mónica Marcela García Quintero.

El 24 de enero de 2022, con el Nro. 20468746, fue radicada ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la petición de cancelación de la matrícula mercantil Nro. 21-498020-01 del comerciante y de la matrícula 21-504665-02 de su establecimiento de comercio; sin embargo, no fue posible llevar a cabo el registro solicitado, por cuanto las matrículas no se encontraban al día por concepto de renovación. Esto con relación al señor Gustavo Alfredo García Quintero.

Mediante comunicación del 18 de marzo de 2022, inscrita en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 23 de marzo de 2022, en el libro 15, bajo el número 21766, la

matrícula mercantil del establecimiento de comercio (21-504665-02) fue cancelada, esto con relación al señor Gustavo Alfredo García Quintero.

El 2 de marzo de 2022, al consultar en la Registraduría Nacional Del Estado Civil, con el número de cédula 70906749, correspondiente al señor Ólver David García Quintero, arrojó como resultado cancelado por muerte.

Recientemente, al realizar una búsqueda de proceso en la página web de la Rama Judicial, por medio del nombre de la demandante, se halló un registro con el radicado 05001310500920200036100 y en el que se observa, en el ítem denominado contenido de la radicación, la anotación "CONSIGNACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR \$6.878.847".

El 16 de febrero de 2022, en representación de la señora María Vanessa, se envió al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, solicitud de elaboración de título judicial, despacho del cual respondieron al día siguiente, con remisión del vínculo de los documentos aportados por la señora Mónica Marcela García Quintero e indicación de haberla requerido para efectos de que aportara la respectiva consignación a la cuenta del Banco Agrario, toda vez que esta no aparece o no se refleja.

#### SOLICITUD

(...) 3) Decretar como medida cautelar innominada, la imposición a los demandados de una caución que satisfaga el ciento por ciento (100%) de las pretensiones de la demanda, so pena de no ser escuchados en juicio; en su defecto, cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

4) Abstenerse de imponer a la demandante el deber de prestar caución para el decreto de la medida cautelar solicitada o, en su defecto, reducirla al máximo dadas las circunstancias que rodean el proceso, aunado a que se trata de la parte débil de la relación contractual.

(...) Ante el conocimiento del presente proceso, los demandados han adoptado un proceder sistemático tendiente a insolventarse, de lo cual se puede derivar mala fe.

Además del evidente comportamiento, durante la ejecución del contrato de trabajo, no cumplieron, entre otras, con la obligación legal de afiliar a la demandante al sistema de seguridad social integral, sumado a que, habiendo sufrido un accidente al servicios de los demandados, se abstuvieron de cumplir con el deber socorro en su calidad de empleadores, le pidieron que les "colaborara" desplazándose a un centro médico asistencial cercano al lugar de habitación de la señora Castaño Ríos y que manifestara que se había tratado de un accidente doméstico; la dejaron sola durante el tiempo de hospitalización en el Hospital San Vicente de Paúl, con una cuenta de más de \$ 13'000.000, de lo cual no le han reconocido un solo peso a la actora y por si eso no resultara suficiente, impidieron la continuidad en el tratamiento que debía seguir, con una afiliación al régimen subsidiado de salud y, en forma sorpresiva, apareció afiliada a la ARL POSITIVA Compañía de Seguros S.A., el día después del accidente, figurando como empleador, el demandado Ólver David García Quintero.

Para continuar con el cúmulo, de las contestaciones de la demanda, presuntamente, intentan inducir en error a la administración de justicia, al hacer creer que el único responsable de todo es Gustavo, pero, ante otro despacho judicial, se aprecia un proceder contrario a las aseveraciones expuestas ante el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, pues la señora Mónica presentó una solicitud de pago de prestaciones sociales a favor de la demandante, de conocimiento del Juzgado Noveno laboral del Circuito de Medellín.

En síntesis, el proceder de los demandados, es notoriamente desleal.

En esta causa se presenta lo atinente al peligro en la mora, pues resulta suficiente hacer un compendio sobre el proceder de los integrantes del extremo pasivo, para arribar a que el derecho invocado se encuentra en un alto riesgo de ser frustrado durante el trámite del proceso, pues con su actuar, evidente resulta la intención de los demandados, durante la ejecución del contrato laboral y ahora, en sede judicial.

Adicionalmente, se logra establecer la apariencia de buen derecho, lo cual se deriva de los medios de prueba arrimados con la demanda y su contestación, de los documentos que se

presentan con esta solicitud, así como de la confesión realizada por conducto de apoderado judicial, de la que se deriva que hubo relación laboral por unos extremos temporales específicos, accidente de trabajo, ausencia de afiliación al sistema de seguridad social integral y falta de pago de derechos laborales desde la fecha de terminación del contrato de trabajo, de lo cual, además, es posible extraer la legitimación e interés que le asiste a las partes para obrar en la presente causa.

La medida solicitada es necesaria, de hecho, se torna imperiosa, en el entendido en que, el proceder de los demandados, es completamente contrario a derecho, da cuenta que hay una intención de defraudar a la demandante, como en efecto, ya lo hicieron durante la vigencia de la relación laboral.

La medida solicitada es razonable, debido a que, ante el eventual éxito de las pretensiones, no habrá posibilidad de materializar la sentencia, ya que, como como ha quedado demostrado, los demandados de forma presurosa, ante la notificación de la admisión de la demanda, cancelaron las matrículas de los establecimientos de comercio, esto es, se insolventaron, dejando prácticamente burlada a la demandante”.

El 20 de mayo de 2022, día que se dio continuación a la audiencia especial para determinar la procedencia de la imposición de una medida cautelar, se dispuso que:

PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar prevista en el artículo 85ª del CPTYSS en el marco del presente proceso ordinario laboral de primera instancia. En consecuencia IMPONER al codemandado GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO la obligación del pago de caución por la suma de \$15.390.719 correspondiente al 38% del valor de las pretensiones cuantificables a la fecha, la cual deberá consignar a órdenes de éste Juzgado en la cuenta N° 050012032013 del Banco Agrario de Colombia, dentro de los 5 días siguientes, o prestar póliza que ampare la caución en el término indicado. De incumplir ésta orden en el término dispuesto, no será oído procesalmente hasta tanto no proceda con la consignación.

SEGUNDO: DESESTIMAR la solicitud de imposición de medida cautelar en contra de los señores YURY GARCÍA QUINTERO, OLIVER DAVID GARCÍA QUINTERO, MÓNICA MARCELA GARCÍA QUINTERO y MODA A LA CARTA Y & J SAS.

Contra dicha decisión la parte actora interpuso y sustento recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS.**

### **2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR**

Identificó algunas confesiones en los dichos del señor GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO y estimó procedente la imposición de la medida cautelar únicamente a cargo de éste, al considerar que incurrió en actos tendientes a insolventarse al cancelar las matrículas y cerrar los establecimientos de comercio de los cuales era propietario, aunado a que este confesó que NO tenía más bienes; incluso según los estados contables, uno de ellos continuó funcionando tras la cancelación de la matrícula, acciones que eventualmente podrían impedir el cumplimiento de la sentencia dado las dificultades económicas en que se encuentra para cumplir oportunamente sus obligaciones, aunado a que, de

acuerdo al balance, el establecimiento obtuvo pérdidas para el momento de su cierre efectivo en diciembre de 2021.

Respecto del señor OLIVER DAVID GARCÍA adujo que al demostrarse su fallecimiento, se configuraba su falta de capacidad para ser parte y comparecer al proceso, contexto en el cual, una medida cautelar en su contra devenía en improcedente, debiendo el apoderado informar si existían sucesores procesales que debían ser reconocidos en dicha calidad.

Frente a la señora YURY GARCÍA QUINTERO señaló que ninguna prueba se aportó para advertir la configuración de los presupuestos del art. 85 A del CPT y la SS. Destacó que, según el Registro Mercantil descargado del RUES, aquella canceló su matrícula de comerciante el 21 de diciembre de 2021, es decir, con anterioridad a la ejecución del contrato de trabajo que a este proceso correspondía.

En cuanto a MÓNICA MARCELA GARCÍA QUINTERO expuso que, conforme la documental allegada, se inscribió como comerciante en el año 2012 y fungió como propietaria del establecimiento de comercio PANADERIA REPOSTERIA RESTAURANTE CAFETERIA LA MEJOR en el que, conforme los hechos de la demanda, la actora prestó sus servicios, calidad que ostentó hasta noviembre de 2021 cuando canceló ambas inscripciones, persona que también solicitó a un juzgado autorización para cancelar las acreencias adeudadas a la trabajadora, pero sin efectuar consignación alguna. No obstante, conforme las declaraciones rendidas, esta demandada realmente NO efectuó materialmente ningún acto de señor y dueño, rol que desempeñó Gustavo Adolfo quien además reconoció su calidad de empleador.

Agregó que NO era la buena o mala fe la que demarcaba la imposición de una medida cautelar, sino la identificación de conductas que avizoraran la imposibilidad de cumplir una eventual condena.

Procedió a efectuar una cuantificación inicial de las prestaciones e indemnizaciones laborales deprecadas, para tasar la caución que legalmente oscilaba entre el 30 y 50% del valor de las pretensiones para ese momento, estimando que las mismas alcanzaban, al margen de su procedencia, un monto de aproximadamente \$40.000.000. Excluyó de la totalización, el resarcimiento de los perjuicios derivados de la culpa patronal al señalar que se requerían de una serie de circunstancias para su configuración, que eran objeto del litigio, aunado a que ni siquiera existía un dictamen que reflejara la pérdida de capacidad laboral, lo que imposibilita la realización de algún cálculo.

## 2.2. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDANTE

Solicita la imposición de una medida cautelar a cargo de la señora YURI GARCIA QUINTERO, a MONICA MARCELA GARCIA QUINTERO y a los eventuales sucesores procesales del señor OLVER DAVID, siendo estos dos últimos quienes fueron saliendo de los establecimientos de comercio, cuando en noviembre de 2021 radicó ante la Cámara de Comercio la correspondiente solicitud.

Agrega que en modo alguno comparte, según los planteamientos de la juez, que el señor Gustavo sea el único que tiene una eventual responsabilidad en la causa, bajo el entendido que los demás NO efectuaron actos de señor y dueño, concretamente Mónica, menos aún si fue quien, en su momento, pretendió efectuar el pago de un depósito judicial a instancia de un juzgado laboral. Debiendo tenerse en cuenta, en lo relacionado con la sana crítica, que en su condición de hermanos buscan ayudarse entre sí, incluso en la audiencia buscaron concatenar aspectos que favorecieran la tesis que estaban proponiendo.

Considera que la medida impuesta debe cobijar a Mónica, NO sólo por el hecho de salir de sus bienes, sino además porque está en una grave situación económica que podría impedir la satisfacción de una eventual condena.

Frente al señor Olver, considera que se presenta una situación más delicada por cuanto fue quien afilió a la demandante a riesgos laborales un día después del accidente.

Considera que el manejo de los hermanos García Quintero tiene como propósito manipular la situación, a lo que se acuñaba la papelería con membrete del señor Olver David a través de la cual se le pagaban unos valores a la demandante.

En tal sentido, debía hacerse extensiva la medida adoptada, ya que todos los demandantes habían incurrido en maniobras tendientes a manipular la situación.

Que aunado a ello, la señora Yudi tenía participación en la causa, conforme se apreciaba en los chats allegados dándole instrucciones a la demandante y aunque NO aparecía como propietaria del establecimiento de comercio, NO figuraba con bienes o recursos que permitan satisfacer la causa en el evento de salir avante.

Que igualmente se apartaba del monto estimado por el despacho, que si bien conocía el tope que consagraba la ley, precisamente la medida era innominada por cuanto su petición se encaminaba a obtener el 100%, sin que fuera excusable su reducción por la crisis que generó la pandemia, pues ello

NO eximía del cumplimiento de unas obligaciones de cara a una trabajadora que dejaron a la deriva, sin que fuera dable prohiar la tesis de la defensa que descargaba toda la culpa en una sola parte.

### 2.3. ALEGATOS PARTE DEMANDANTE

Expresamente indicó que:

Se propende porque la medida cautelar se extienda a los demandados Yuri García Quintero, Mónica Marcela García Quintero, Gustavo Alfredo García y a los sucesores procesales de Ólver David García Quintero, en atención a que, con posterioridad a la notificación personal del auto admisorio de la demanda, tres de los nominados cancelaron la matrícula de los establecimientos de comercio de los que ostentaban la propiedad y como se logra extraer de sus actuaciones durante la ejecución del contrato de trabajo y ahora, en sede judicial, lo que pretenden, de acuerdo a la tesis defensiva, es hacer notar que el único empleador y por tanto responsable, es el señor Gustavo, posición que en modo alguno se debe prohiar, porque sería tanto como restarle valor a los diferentes actos jurídicos que como comerciantes y empleadores realizaron en su momento los señores Yuri, Mónica y Ólver, lo que de paso podría dar lugar a auspiciar procedimientos irregulares que derivan en detrimento de la parte débil como lo es el trabajador.

No se puede perder de vista que, varios fueron los actos que comprometen la responsabilidad como empleadores de los demandados. En el caso de la señora Mónica Marcela, su calidad de comerciante y propietaria del establecimiento de comercio donde acaeció el accidente de trabajo no ofrecen duda, aunado a que, ante los jueces del trabajo, realizó una solicitud para el pago de prestaciones sociales a favor de la demandante, aspectos que, sumados al cierre del establecimiento de comercio, sin ambages, la ubican como empleadora.

En consonancia con lo anterior, desde el análisis de las finanzas, el cierre del establecimiento de comercio se torna poco razonable, pues no se logra entender cómo pudo mantener abierta al público la cafetería en la época de mayores restricciones por causa de la pandemia, pero que, para finales del año 2021, que por parte del Gobierno Nacional se permitió la operación con cierta normalidad de los diferentes sectores de la economía, optara por cerrar, estando cercana a una temporada como lo es la decembrina, sumado a que por fechas, el balance arrojado como prueba oficiosa, no concuerda.

En el caso de Ólver García, resulta relevante tener en consideración que, conforme con las documentales arrojadas con la demanda y con la contestación, se logra denotar que realizó una afiliación de la señora María Vanessa al sistema de riesgos laborales para el 29 de junio de 2020, día después de ocurrido el accidente de trabajo, además que, se observa que a la señora María Vanessa le efectuaron pagos, cuyas constancias reposan en recibos membretados con el nombre del señor Ólver, alusivos a la segunda quincena del mes de julio de 2020.

En lo que tiene que ver con la señora Yuri García, se advierte, de un extenso chat de WhatsApp, que era la persona encargada de coordinar y dar instrucciones a la trabajadora.

En lo atinente al señor Gustavo Alfredo García Quintero, ha confesado por conducto de apoderado judicial, haber sido empleador. Preciso es destacar que, en el mes de enero de 2022, el señor Gustavo intentó cancelar las matrículas de persona natural comerciante y de establecimiento de comercio denominado RESTAURANTE PANADERIA CAFETERIA EL PATIO. En el mes de marzo de 2022, puso al día la renovación de la matrícula para efectos de poder llevar a cabo la pretendida cancelación, pero en esta oportunidad, únicamente respecto del establecimiento de comercio, quedando vigente la matrícula de persona natural comerciante, cuyo domicilio es la misma dirección del establecimiento de comercio que dijo haber cerrado, y al preguntarle sobre la razón por la que mantiene ese domicilio, adujo que fue propietario del establecimiento, que tuvo que vender a un socio la parte que le correspondía y que actualmente labora en el lugar en calidad de administrador. En sí, pese a la propuesta defensiva, lo que se puede observar es que los hermanos García Quintero

han trabajado conformando una especie de grupo mercantil, estando en cabeza de cada uno de ellos uno o varios establecimientos de comercio, contando con la calidad de comerciantes individuales ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y que, ante el accidente padecido por la señora María Vanessa, presuntamente han desplegado toda una serie de maniobras tendientes a defraudar los derechos de la demandante, así como sus aspiraciones judiciales.

El despacho en la primera instancia ha considerado que el único que debe soportar la medida cautelar es el señor Gustavo Alfredo, no obstante, al reparar en la motivación del juzgado para arribar a esa conclusión, implica, en parte, el acogimiento de la tesis propuesta en la defensa, que de ser así, no podría pasar inadvertida por el eventual riesgo que representa para los demandados, puesto que, desde la réplica a la demanda y aún más, con las manifestaciones de los señores Mónica Marcela y Gustavo Alfredo en audiencia especial, llevan a cuestionar, mínimamente, ¿cuál es el motivo por el que un comerciante abre diferentes establecimientos de comercio para ponerlos a nombre de terceros?

Además, se debe observar que, los demandados Mónica Marcela, Ólver David y Gustavo Alfredo, todos de apellido García Quintero, ejecutaron el cierre pronto y sistemático de los establecimientos de comercio con posterioridad al conocimiento del auto admisorio de la demanda, sin que para la audiencia especial del artículo 85 - A del procedimiento del trabajo hubieran aportado pruebas que permitieran comprender con suficiencia lo relativo al despojo de los bienes, actuar que, visto luego del enteramiento de la demanda laboral, aunado a lo presuroso y carente de justificación, lleva a colegir que tal proceder no hace parte del giro comercial ordinario de los demandados, sino que, se trata de una posible estrategia para defraudar a la actora ante el eventual éxito de las pretensiones.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 85-A del CPT y la SS, se cumplen los presupuestos para imponer la medida cautelar a los señores Yuri Tatiana, Mónica Marcela, Gustavo Alfredo y Ólver David (sucesores procesales); a la primera, por carecer de los recursos para la satisfacción de una eventual sentencia condenatoria; a los demás, por haber llevado a cabo supuestos actos tendientes a insolventarse sin que mediara justificación alguna.

Ya, en lo atinente al valor de la confesión del litisconsorte, se debe tener en consideración que, en el caso particular, las declaraciones se deben analizar con mayor rigor, empleando las reglas de la sana crítica, en atención a que se trata de un grupo de hermanos que han presentado una defensa encaminada a responsabilizar únicamente a uno de ellos, pese a que los medios documentales dan a entender algo bien diferente.

En lo referente al tipo de medida cautelar solicitada, si bien se aludió a la imposición de una caución, a diferencia de lo razonado por la Señora Juez, se considera que la deprecada es de carácter innominado, en el entendido en que si bien en el artículo 85-A del CPT y a la SS se encuentra determinada la caución, esta contiene un límite en cuanto a un porcentaje de las pretensiones, lo que, hace que, la solicitada, que es por el ciento por ciento de lo demandado, tenga el carácter de lo dispuesto en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del CGP.

“En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga. A través de ellas el juez podrá adoptar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”. (Sentencia C- 043 de 2021).

En dichos términos solicita que se acoja la medida cautelar solicitada como innominada o, en cualquier caso, hacerla extensiva a quienes fueron excluidos.

### 3. CONSIDERACIONES:

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 7º del artículo 65 del C.P.T y la SS, es apelable el auto que *decida sobre medidas cautelares*.

Aclarado lo anterior, comportará el punto de partida lo normado en el art. 85 A del CPT y la SS, que soporta la procedencia de la súplica, salvo lo atinente a su tasación, cuyo tenor es:

ARTÍCULO 85-A. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 37-A de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> **Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia**, o cuando el juez considere que el demandado **se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones**, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden. (Resaltos propios)

Ahora, las razones de la posible dificultad en el pago deben ser analizadas por el juez, de acuerdo a la conducta del demandado o a la situación económica de éste, dado que la finalidad de la norma es establecer con seguridad que las posibles condenas a favor de la parte actora no se conviertan en obligaciones imposibles de ejecutar.

Por ello, de la norma aludida puede extraerse con facilidad la carga que en tal sentido le asiste a quien pretende beneficiarse de la imposición de la caución, pues debe indicar los motivos y hechos en que se funda su petición, los que a su vez deben ser de tal contundencia que impongan la necesidad de decretar tal medida cautelar, que busca no sólo garantizar el cumplimiento de una sentencia, sino además impedir que se *oiga* a la parte demandada, independientemente del estado en que se encuentre el proceso ordinario, pues su formulación no está atada a un momento particular de tal trámite.

Debe además tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante sentencia C-043 de 2021 cuando declaró EXEQUIBLE de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, por el cargo de igualdad, en el entendido *que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden*

*invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal "c", numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso.*

El literal aludido dispone que:

ARTÍCULO 590. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

(...) c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre **razonable** para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

Para decretar la medida cautelar el **juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.**

Así mismo, el juez tendrá en cuenta **la apariencia de buen derecho**, como también la **necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida** y, si lo estimare procedente, **podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada**. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

Así las cosas, aunque la norma en mención autoriza al juez a imponer cualquier tipo de medida, estima que la misma **debe ser razonable** para la protección del derecho en litigio o asegurar la efectividad de la pretensión. Esto dijo la Corte en la sentencia referida:

“(…) En la ya reseñada sentencia C-379 de 2004, esta Corporación señaló que la razón de ser de la medida “es precisamente evitar el desconocimiento de la sentencia, pues cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse, podrá el juez imponer la caución, garantizando el cumplimiento de la misma”.

En efecto, dijo la Corte, lo que busca la norma es “asegurar que quien es demandado, cumpla a cabalidad con las resultas del proceso, y si , **después de valorar las pruebas**, el juez estima procedente decretar la medida cautelar, necesario es, que efectivamente se preste, pues de lo contrario, la sentencia podría quedar en el vacío, y no tiene sentido que quien se somete a un largo procedimiento con el fin de que se le reconozcan sus derechos prestacionales, no pueda finalmente ver materializada su pretensión”

(…) En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que **el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con**

**el tipo de pretensión que se persiga.** A través de ellas el juez podrá adoptar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.

(...) Así, la referida interpretación judicial del artículo acusado aumenta significativamente la garantía del derecho de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de los justiciables del proceso laboral, pues para decretar la medida cautelar innominada el juez seguirá los parámetros establecidos por el art. 590 del CGP. Con esto se superan la desventajas que los demandantes señalaban respecto del art. 37A de la Ley 712 de 2001, referidas (i) al listado de medidas disponibles, (ii) su efectividad, (iii) el estándar para decretarlas y (iv) el plazo para resolverlas. Sumado a ello, este entendimiento de la norma es conforme con los principios de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, el de contar con un recurso judicial efectivo y con el trato especial que la Constitución Política otorga a los derechos al trabajo y a la seguridad social, tanto en su dimensión sustancial como procedimental.

(...) Dicho literal establece, principalmente, que se puede aplicar cualquier otra medida que el juez encuentre **razonable** para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. **Para decretar la medida cautelar el juez apreciará, entre otras situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.**

Ahora bien, la exequibilidad condicionada de la norma demandada suple el déficit de protección de los justiciables de la jurisdicción ordinaria laboral en relación con la efectividad e idoneidad de las medidas cautelares que tienen para garantizar sus pretensiones. Pero es el legislador el llamado a diseñar un régimen de medidas cautelares fuerte que responda a las características especiales de quienes acuden ante la justicia laboral reclamando el reconocimiento de sus derechos. (Resaltos propios)

De acuerdo con esta norma, la medida cautelar procede en los eventos donde el juez advierta los siguientes comportamientos del demandado:

- (i) cuando efectúe actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia,
- (ii) o cuando se encuentre en “graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones”.

Pero para arribar a dicha conclusión, debe efectuarse una valoración previa que permita, tras el análisis de algunos medios, encontrar acreditado por lo menos una de las dos situaciones descritas, empero, concomitantemente, el operador jurídico también debe apreciar otra serie de factores como *la legitimación o interés para actuar de las partes*, la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho, el cual debe tener apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, pues bien puede el fallador, como sucedió en este caso, decretar una menos gravosa que la solicitada.

Bajo este esquema normativa, descendemos al caso puesto en consideración de la Sala, donde, en síntesis, se pretende la extensión de la medida a otras personas naturales que conforman la parte resistente del juicio. Ellas son: YURI TATIANA GARCÍA QUINTERO, MÓNICA MARCELA GARCÍA QUINTERO y ÓLVER DAVID GARCÍA QUINTERO (fallecido en el transcurso del proceso).

Dicha súplica se erige principalmente en los actos realizados por dos de ellos días después de notificarse el auto que admitió la demanda en octubre de 2021. Y es que tanto MÓNICA MARCELA GARCÍA QUINTERO como ÓLVER DAVID GARCÍA QUINTERO cancelaron su matrícula NO sólo como comerciantes, hecho que aconteció los días 19 y 5 de noviembre de 2021, respectivamente, sino además los establecimientos de comercio que figuraban a su nombre. En el caso de la primera PANADERIA REPOSTERIA RESTAURANTE CAFETERIA LA MEJOR, lugar donde trabajaba la demandante y sufrió el accidente de trabajo, en el caso del segundo el RESTAURANTE PARRILLA Y SABOR DE SUCRE, ambos actos en las fechas aludidas respecto de cada uno.

Tales hechos realmente NO se discuten, incluso la prueba documental respalda su veracidad, sino las causas de ello. Pero antes de adentrarnos su análisis, es necesario realizar la siguiente precisión.

Y es que otra cosa sucede respecto de YURY TATIANA GARCÍA QUINTERO. La parte actora la identifica como empleadora conforme las conversaciones sostenidas en los chats allegados, relacionadas con el accidente. Por su parte, en la declaración rendida, la co-demandada aduce que fungió como secretaria del establecimiento de comercio la Mejor aproximadamente ocho años, los cuales culminaron con la pandemia pues a partir del 18 de marzo de 2020 *no volvió*, porque no había ingresos con los cuales cubrir la nómina, aunque posteriormente acepta que sólo una vez, en mayo o junio, fue a recoger unos papeles. Aduce que fue compañera de trabajo de la demandante como desde octubre de 2019, cuando la señora Venessa ingresó, y hasta aquel marzo de 2020. Aclara que el negocio volvió a funcionar en abril de 2020 pero con restricciones y personal reducido, no había atención en mesas sino en vitrina, y el administrador, Eduar Vásquez, quedó encargado de lo atinente a las afiliaciones *de todo el paquete* (salud, riesgos laborales, pensión y caja de compensación) a través de un prestador que se llamaba *Moda a la Carta*.

Su calidad o no de empleadora, será objeto de esclarecimiento una vez se evacúe la prueba y se analice, de cara al principio de primacía de la realidad sobre la formalidad que opera en el derecho laboral, quien ostenta tal estatus. Sin embargo, ello en NADA incide para la imposición de la medida cautelar que se pretende, especialmente cuando, conforme el certificado de cámara de comercio, ninguna actuación ha realizado que pueda incidir en la materialización de una eventual condena. Esta es la información que sobre ella se aprecia:



CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.  
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

CERTIFICADO DE CANCELACION DE MATRICULA

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matriculas de Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE GARCIA QUINTERO YURY TATIANA  
IDENTIFICACION N 1128438702-9  
DOMICILIO PRINCIPAL MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA  
MATRICULA NUMERO 21-434520-01 de Julio 29 de 2010

ACTIVIDAD ECONOMICA CODIGO CIIU VERSION 4.0 A.C.

1081: Elaboración de productos de panadería

5613: Expendio de comidas preparadas en cafeterías

CERTIFICA

ACTO CANCELACION MATRICULA COMERCIANTE  
TIPO DOCUMENTO COMUNICACION  
FECHA DOCUMENTO Diciembre 21 de 2017  
DATOS INSCRIPCION LIBRO: 15 NRO.: 100095  
FECHA INSCRIPCION Diciembre 21 de 2017

CERTIFICA

Nótese que las actuaciones adelantadas ante tal entidad datan de años atrás a la ocurrencia de los hechos aquí debatidos. Tampoco fungió como propietaria del establecimiento comercial en el que se desencadenaron los hechos.

Y es aquí donde se pregunta esta Magistratura, ¿Qué actos ha realizado la señora Yury tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia? O ¿Qué medios de prueba evidencian que se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones?

En este aspecto son huérfanas las afirmaciones del recurrente, quien parece cimentar su solicitud en el hecho de que aquella NO figuraba con bienes o recursos que le permitieran satisfacer la causa en el evento de salir avante. Sin embargo, de un lado, tal aseveración carece de sustento probatorio, nada se conoce de su situación económica, y de otro, ello no es lo que estipula la norma. En ningún momento el legislador previó que ante la ausencia patrimonio, un posible deudor debía pagar una caución. Así pues, nada evidencia que YURI TATIANA GARCÍA QUINTERO se encuentre inmersa en uno de los supuestos que contempla la ley, debiéndose confirmar respecto de ella, la decisión objeto del recurso de alzada.

Ahora, frente a MÓNICA MARCELA GARCÍA QUINTERO y ÓLVER DAVID GARCÍA QUINTERO, se presentan circunstancias similares y otras diferenciadoras de cara al caso de Yury Tatiana.

Similares en cuanto a que, igual que sucede con dicha codemandada, NADA se conoce respecto de su situación económica.

Adviértase en este punto que, para lograr el decreto de una medida cautela sustentada en la segunda causal que contempla el art. 85 A del CPT y la SS, es determinante la configuración de dos

características: la **gravedad y seriedad** de las dificultades que claramente atravesase el o los deudores para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, debiendo acreditarse una circunstancia real que dé cuenta de dicha situación, siendo inadmisble fundarla en una simple suposición que no esté acompañada de otros documentos que generen certeza al fallador acerca de su ocurrencia.

Así pues, necesariamente, el sustento normativo para su imposición solamente podría fincarse en el primer supuesto que regula la norma: la incursión en actos tendientes a insolventarse. Empero, analizadas las declaraciones surtidas en primera instancia, para esta Magistratura NO existen elementos suficientes para predicar que MÓNICA MARCELA y, en vida, ÓLVER DAVID, tuvieron la intención de insolventarse para evadir sus obligaciones, pues la sola cancelación de los establecimientos de los cuales figuraban como propietarios, en el contexto de la crisis que desencadenó la pandemia en el gremio de comerciantes, NO es indicativo que con ello quisiesen impedir la efectividad de una eventual sentencia condenatoria.

Y en este aspecto resultan bastante ilustrativa la versión de GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO. Refiere que por temas de impuestos, Mónica Marcela fue registrada como propietaria de *La Mejor* (entiéndase la cafetería donde laboraba la demandante), pero que ella realmente nada tenía que ver con el asunto, pues materialmente era el único jefe y propietario, aspecto que guarda coincidencia con lo narrado por la señora Mónica quien señala que ni siquiera conoció a la demandante.

Continúa su exposición indicando que a finales del año 2019 vendió su casa para poder comprar la totalidad de la Mejor, sin imaginar que unos meses después vendría la pandemia, la cual desencadenó el cierre definitivo del negocio. Inicialmente estuvo cerrado 20 días, antes de eso las ventas eran aproximadamente \$300.000.000 mensuales, promediándolo en \$3.000.000 diarios, la reapertura fue con restricciones, autorizándose únicamente venta en vitrina, época en la que se vendía \$200.000 diarios que únicamente le alcanzaban para pagar la nómina, atrasándose en el pago de 6 cánones que ascendían, cada uno, a \$27.000.000. Posteriormente llegó a un acuerdo con el propietario y el Gobierno permitió el uso de algunas mesas, pero los clientes habían disminuido notoriamente y solo podría llevar las ventas diarias a un máximo de \$1.500.000 con el cual NO le alcanzaba ni para pagar el acuerdo con el dueño del local. Que siempre tuvo la intención de salvar el negocio, pero lo entregó en diciembre de 2021 cuando lo negoció con un tercero.

Se aprecia en sus dichos coherencia, claridad, espontaneidad, ilación entre cada idea. Y ello sirve para entender porque la señora Mónica Marcela canceló la matrícula del establecimiento, al margen de aquella discusión de si fungió o no como empleadora, o si tiene algún grado de responsabilidad por *prestar su nombre*. Fue una situación de público conocimiento el grado de afectación de la pandemia

a determinados sectores, especialmente al gremio de comerciantes, contexto bajo el cual NO lograría entenderse como, de ser un negocio próspero, fructífero, se prescindiría de tal ingreso para evadir una eventual obligación. Son otras las circunstancias concomitantes, como lo refieren los demandados, que desencadenaron el cierre de los establecimientos de los cuales eran propietarios Mónica Marcela y Olver David, último que también tenía un negocio con un declive debido a las mismas circunstancias, y aunque NO se tuvo la oportunidad de escucharlo en audiencia, pues ya había fallecido, estos es lo que refieren los restantes declarantes, especialmente Yury Tatiana y Gustavo.

En tal sentido, NO tendrá eco en esta instancia la solicitud del recurrente en cuanto a la extensión de la medida cautelar, ni en lo atinente al aumento de la caución, pues la Sala NO encuentra alguna razón atendible que justifique el incremento del monto de aquella cuantificada por la a quo, más allá de la simple petición que en tal sentido se eleva.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la decisión objeto del recurso de alzada.

Se condenará en costas en esta instancia a la demandante por NO haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$100.000 a favor de YURI TATIANA, MÓNICA MARCELA y GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO.

#### 4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, SALA TERCERA LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión proferida el 20 de mayo de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, a través de la cual resolvió lo atinente a la imposición de una medida cautelar, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **MARIA VANESSA CASTAÑO RÍOS y ELKIN HUMBERTO OMAÑA RAMÍREZ**, ambos en nombre propio y representación de sus hijos **ELIN DAYANA y MARIANGEL OMAÑA CASTAÑO**, contra la sociedad **MODA A LA CARTA Y & J SAS**, y los señores **YURI TATIANA, MÓNICA MARCELA, ÓLVER DAVID y GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO** respectivamente, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

**SEGUNDO:** costas en esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como agencias en derecho la suma de \$100.000 a favor de cada una de los demandados YURI TATIANA, MÓNICA MARCELA y GUSTAVO ALFREDO GARCÍA QUINTERO.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**CERTIFICO:** Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 014 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 31 DE ENERO DE 2023

\_\_\_\_\_  
Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>